

Entre la resistencia a la dictadura y la normalización sindical. El terrorismo de Estado en Fiat Córdoba

María Laura Ortiz

Introducción

En este capítulo se analizarán las consecuencias derivadas de la instalación del terrorismo de Estado entre los trabajadores cordobeses, examinando particularmente a los obreros de Fiat. Se examinarán las estrategias represivas orientadas hacia ese sector, tanto en lo económico como en lo político, reconociendo las modalidades, expresiones y limitaciones de la resistencia obrera en aquellas condiciones. Asimismo, se reconocerá el rol de los dirigentes gremiales y sus posicionamientos en torno a la normalización sindical producida a finales de la última dictadura cívico-militar.

La hipótesis general de este trabajo sostiene que la represión política y económica del terrorismo de Estado hizo foco en los núcleos de trabajadores clasistas y combativos, que en los años previos habían generado formas de organización sindical muy eficaces para la defensa de sus derechos. Por ello, la represión fue encabezada por el gobierno militar pero montada sobre la disputa capital-trabajo en favor del primero y traducido en el cambio de modelo económico. El caso seleccionado posee un valor instrumental y heurístico útil para la comprensión de procesos más generales (Archenti, 2018), ya que cada una de las maneras en que la contracción de la industria afectó a los trabajadores es posible de rastrear en la experiencia de Fiat en Córdoba: despidos, suspensiones y licencias forzosas que reducían el salario real, agravado por los aumentos de precios y de tarifas. No obstante, los trabajadores conservaron una serie de formas organizativas que formaban parte de la experiencia obrera de los años previos y que pervivieron a pesar del inmenso peso de la represión en las fábricas de Córdoba y la desarticulación de las estructuras sindicales. Aunque no era posible sostener manifestaciones masivas, durante los primeros años de la dictadura los trabajadores ejercieron distintas acciones clandestinas para regenerar la organización de las bases y resistir a la represión. Pero a partir de 1980 esas acciones de bases fueron diluyéndose, a la par que las dirigencias sindicales tradicionales reaparecieron en la escena para negociar la normalización en los sindicatos y centrales obreras locales con el gobierno militar en retirada.

Más allá de los estudios previos sobre este tema a nivel nacional o en otras localidades, sobre el período abordado en Córdoba hay investigaciones en torno de las políticas de disciplinamiento aplicadas hacia los trabajadores públicos (Romano, 2018), sobre trabajadores de fabricaciones militares (Roitman, 2018) o sobre los trabajadores industriales clasistas y combativos (Ortiz, 2019).

Otros trabajos han indagado procesos vinculados a la dictadura en Fiat Sauce Viejo (Bianco y Brandolini, 2019) o en Fiat en toda la Argentina, ya sea con el objetivo de indagar sobre la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado (Galli, 2018) o con la preocupación de analizar la vida cotidiana de los trabajadores en contextos represivos (Robertini, 2016).

En los últimos años se ha complejizado el recorte temporal del terrorismo de Estado, incluyendo en él distintas experiencias que se extendieron en el tiempo, como es el caso de Córdoba que comenzó a partir del Navarrazo en 1974.¹ De la misma manera habría que considerar la desintegración del PRN y la transición a la democracia, como parte de un proceso al que es difícil poner coto en 1983.

Como se podrá apreciar, en este trabajo se abordarán diferentes tipos de fuentes históricas, pero principalmente se utiliza la serie documental constituida por Memorándums y Radiogramas de la Policía Federal Argentina (PFA) con sede en Córdoba. Se trata de un corpus producido entre los años 1974-1982, cuyas copias digitales se resguardan en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. En ellos se concentra la información que circulaba internamente entre organismos de inteligencia del Ejército y la Policía sobre todo lo relativo a la considerada “subversión”, constituyendo una evidencia de la infiltración que los servicios de inteligencia tenían sobre estos ámbitos, ya que en su mayor parte fueron elaborados en base a “medios propios”, es decir mediante datos obtenidos de “informantes” que trabajaban para la fuerza. La existencia de este acervo es la demostración de la faz burocrática de las instituciones de inteligencia policial cuya rutinización de las tareas de “auscultar” información de posibles “enemigos” o “sospechosos” generó un convencimiento arraigado que terminó autolegitimando la tarea y promoviendo su continuación en el tiempo (Marengo, 2015: 2). Una vez que se procedió a la desclasificación de esos documentos, estos archivos pueden ser utilizados con otros fines diferentes a la represión y de hecho se erigieron como una de las pruebas fundamentales para el desarrollo de juicios por delitos de lesa humanidad (Kahan, 2007). Sin embargo, esta documentación ha sido poco explorada con fines de investigación, por lo que este trabajo pretende aportar también en ese sentido, utilizando estos “archivos de la represión” a contrapelo de las intenciones opresivas de su creación. Pero lo que los documentos dicen no puede ser tomado como mera “verdad”, hay que problematizar esas verdades cruzándolas con el contexto de producción del documento y el proceso de conservación en el tiempo (Marengo y Castronuovo, 2015: 114).

Breve *racconto* de la historia de Fiat en Córdoba

¹ El Navarrazo (28 de febrero de 1974) consistió en un golpe de Estado provincial encabezado por el Jefe de la Policía provincial, Teniente Coronel (re) Antonio Domingo Navarro. Derrocó al gobierno de Córdoba liderado por Ricardo Obregón Cano y Atilio López, derivando en la intervención federal de la provincia (Servetto, 2010).

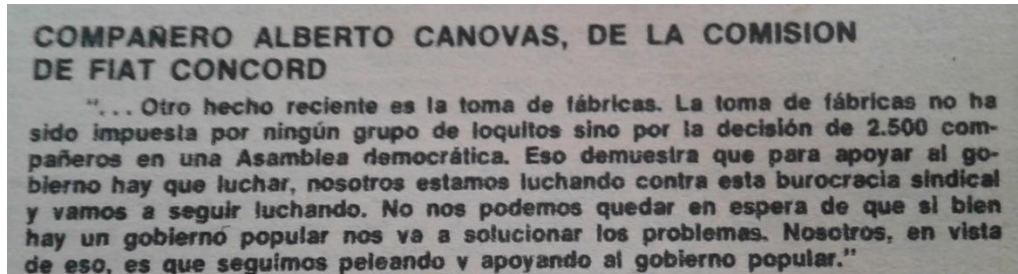
Fiat se instaló en Córdoba en la década de 1950 en el marco de un proceso de industrialización regional que, en el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, promovía las inversiones extranjeras. Se erigieron tres establecimientos en la zona de Ferreyra, al sudeste de la ciudad capital: Concord, que primero producía tractores, luego autos y camiones; Materfer que fabricaba equipos ferroviarios y Grandes Motores Diesel (GMD) que elaboraba motores para camiones, ómnibus y locomotoras. En los primeros años, todos los trabajadores de Fiat fueron encuadrados sindicalmente en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero desde 1965 la empresa buscó fragmentar la organización de los trabajadores para su disciplinamiento, logrando la creación de dos sindicatos por planta: el Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord (SiTraC) y de Fiat Materfer (SiTraM), mientras los obreros de GMD fueron afiliados al Sindicato Mecánico y Afines del Transporte Automotor (SMATA) (Brennan, 1992: 7-13).

Los intentos de control empresario se vieron dificultados después del Cordobazo de mayo de 1969, en un clima de movilización de las bases obreras que reaccionaron ante nuevas reglamentaciones laborales y salariales, ejerciendo presión sobre la dirigencia sindical. A partir de allí comenzó un proceso de autoorganización obrera que terminó desplazando a la anterior conducción sindical y formando una nueva CD. Para presionar sobre su reconocimiento, los obreros de Concord ocuparon la fábrica, inaugurando un repertorio de confrontación que caracterizaría al clasismo: los jefes quedaron como rehenes y rodearon el establecimiento con tanques de líquido altamente inflamable y bombas molotovs. Se inició así un proceso de politización y de participación gremial en los obreros de Concord que fue imitada por sus compañeros de Materfer, quienes también expulsaron a “la dirección amarilla” de SiTraM (Duval, 2001: 29-32; Flores, 2004:152). El proceso histórico que despuntó desde aquel entonces tuvo una gran intensidad y gravitó profundamente en la realidad social de aquellos años. Se había regenerado el clasismo como una propuesta sindical alternativa al modelo tradicional poniendo en discusión todo el sistema fabril: defendieron los descansos y el desacople de tareas, lograron el reconocimiento de tareas insalubres, intentaron acompañar los aumentos salariales con las ganancias de la empresa quitando el premio a la producción, entre otras demandas (Brennan, 1992: 13-14). La organización de bases, con recurrentes asambleas abiertas y delegados mandatados, con ocupaciones de fábrica como la que se acaba de referenciar, fueron características distintivas de estos sindicatos. Sus vinculaciones con partidos de izquierda revolucionaria promovieron una definición por el socialismo, asociando al clasismo con la vanguardia en un proceso revolucionario que, según sus evaluaciones, estaba iniciando (Ortiz, 2019).

La existencia de sindicatos clasistas había cristalizado un conjunto de demandas obreras que para las patronales empresarias significaban un aumento sustancial de los costes de producción. Por ello buscaron sofocar su actuación disolviendo los sindicatos a poco más de un año de presencia

clasista en la dirección sindical. A partir de allí, las resistencias obreras eran dificultadas sistemáticamente por una dura persecución empresarial y militar: no podían hablar entre ellos, la fábrica “se había convertido en una cárcel” y se despidió a casi 300 operarios, activistas y dirigentes sindicales.²

Luego de la disolución de los sindicatos clasistas los obreros lucharon por recuperar sus sindicatos por planta, mientras la Secretaría de Trabajo los obligó a encuadrarse en la UOM. Con ello los nuevos dirigentes fabriles, que estaban ligados al peronismo ortodoxo, implantaron un modelo sindical de negociación con la patronal y sofocaron los intentos de organización de las bases, incluso dejaron de acatar los paros declarados por la CGT regional.³ Según denuncias de los obreros, los nuevos representantes sindicales eran “matones de la SIDE” contratados por la patronal.⁴ Gracias a estos cambios la empresa se garantizaba la desmovilización necesaria para aumentar los ritmos productivos y la vuelta al acople de máquinas, dos cuestiones que habían sido revertidas durante la dirección clasista de los años anteriores. No obstante, los activistas clasistas que habían conservado su trabajo en Concord y Materfer promovieron elecciones para una nueva CIR, por fuera de la UOM. También convocaron a un plebiscito y, viendo que no eran escuchados, organizaron una ocupación de fábrica en agosto de 1973 (Ortiz, 2019: 290-306).



Declaraciones de uno de los miembros de la comisión provisoria de Fiat Concord en *El Descamisado*, N° 25, 6/11/1973. Alberto Canovas fue secuestrado en su domicilio de Córdoba el 27/3/1976 y continúa desaparecido.

En ese momento se profundizaron las amenazas a los trabajadores por parte de comandos paramilitares que tenían acceso a la planta,⁵ o que participaron en ataques a sedes partidarias y

² *Córdoba*, 30/10/1971, p. 1; *Córdoba*, 02/11/1971, p. 3; *Córdoba*, 03/11/1971, p. 7.

³ *Córdoba*, 04/02/1972, p. 1; *Córdoba*, 30/05/1972, p. 5; *Córdoba*, 29/06/1972, pp. 3-4; Revista *SMATA Córdoba*, N° 106, 04/07/1973, p. 2. A fines de la década de 1960, los ortodoxos se definieron así para remarcar su adhesión intransigente a los principios peronistas y distinguirse del sector legalista, más dispuesto a la negociación con el Estado y a competir por el liderazgo de Juan Domingo Perón. Defendían el verticalismo como única forma de dar fidelidad incondicional a Perón. En la década de 1970 el peronismo ortodoxo se convirtió en sinónimo de contrarrevolucionario, sobre todo por sus vinculaciones con los comandos parapoliciales que operaron en consonancia con la policía y otras esferas estatales de la provincia luego del Navarrazo (Brennan y Gordillo, 2008: 34-47; Ortiz, 2019: 131-138).

⁴ Rognone, Rubén, obrero de Fiat Materfer, entrevista realizada en Córdoba el 22/09/2011 por Florencia Céspedes. SIDE: Secretaría de Inteligencia de Estado.

⁵ Declaraciones de Mario Abdon en la conferencia de prensa de despedidos de Fiat Concord y Materfer en el local de la Unión Obrera Gráfica en Buenos Aires, publicadas en *Ya! Es tiempo de pueblo*, Año 1, N° 9, 24/08/1973, pp. 14-15.

sindicales identificadas con la izquierda, como sucedió en el asalto al sindicato mecánico en julio de 1973 en el que los atacantes se refugiaron luego en la sede de la UOM.⁶ Otro hecho similar sucedió en la agresión contra un activista de Concord en 1975, por el cual se decidió expulsar de la UOM a dos dirigentes metalúrgicos supuestamente implicados.⁷



Revista *Ya! Es tiempo de pueblo*, N° 23, 29/11/1973, p. 8.

En esa situación de doble organización sindical dentro de las fábricas de Fiat Córdoba se instaló el terrorismo de Estado, que golpeó especialmente al sector obrero industrial con políticas represivas en lo económico y lo político. La violencia se fue acelerando entre los años 1974 y 1976, iniciando con el Navarrazo y derivando en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la instalación de la dictadura cívico-militar hasta 1983.

Políticas represivas en Fiat durante el terrorismo de Estado

Desde los primeros años de la transición a la democracia se dimensionaron las consecuencias del terrorismo de Estado en Argentina, reconociendo que aquella maquinaria se había implementado para cambiar sustancialmente las bases sociales, económicas y políticas de la Argentina. A partir de informe elaborado por la CONADEP⁸ se conocieron las estrategias represivas y sobre todo, el sujeto

⁶ Córdoba, 17/07/1973, pp. 1 y 5; *El Descamisado*, Año I, N° 10, 24/07/1973, pp. 38-39; *Ya! Es tiempo de pueblo*, Año 1, N° 4, 20/07/1973, pp. 26-27; *El Peronista*, Año I, N° 3, 24/07/1973, p. 12.

⁷ Ortiz, María Laura (2019). *Con los vientos... op. cit.*

⁸ La Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) fue designada por el Poder Ejecutivo Nacional para investigar los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura militar (1976-1983). A partir de sus informes se publicó el libro *Nunca Más*, que recopilaba sus conclusiones y algunos testimonios. En cada provincia, a su vez, se

social contra quien se implementaron: los “subversivos”. Aunque la definición de subversión nunca fue del todo clara -y justamente esa era una de las razones por las cuales se generaba el terror- lo cierto es que en las memorias sobre el asunto se la asoció con guerrilleros/as, revolucionarios/as, intelectuales, universitarios/as, entre otros/as. Sin embargo, el 30,2% de los/as desaparecidos/as fueron obreros/as y, en el caso de la provincia de Córdoba esa cifra ascendía a 41,90%.⁹ De ellos/as, al menos 118 eran trabajadores o ex trabajadores de las distintas plantas fabriles y oficinas de la Fábrica Italiana de Automóviles Torino (Fiat) asentadas en Argentina y unos 35 pertenecían a las plantas ubicadas en Córdoba.¹⁰ Un estudio de las listas de desaparecidos obreros de Córdoba permite reconocer que el componente obrero estaba ligado al sector de activistas y dirigentes sindicales clasistas y combativos (Di Rienzo et al, 2012; Romano, 2016). Hay que aclarar que estas cifras están en constante revisión ya que todavía hoy, a más de 40 años de los hechos, se siguen incorporando denuncias por desapariciones, sobre todo en sectores obreros y populares que por distintas razones no accedieron a los canales de denuncia instaurados en la década de 1980.

La represión en Fiat inició el mismo día del golpe de Estado: el 24 de marzo de 1976 un obrero fue secuestrado y desaparecido desde su lugar de trabajo en Fiat Concord. Aunque el informe de inteligencia de la PFA lo sindicó como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), otros testimonios lo habían identificado repartiendo prensa del Partido Comunista Revolucionario (PCR).¹¹ Claramente este no fue el único caso, pero quizás la desaparición desde la fábrica fue tan visible que los siguientes memos internos de los servicios de inteligencia remarcaban la necesidad de actualizar los domicilios de todos los trabajadores, ya sean industriales, de comercio o de servicios públicos, probablemente para poder realizar los secuestros allí. El Comandante del III Cuerpo de Ejército daba un plazo perentorio de 72 horas para realizar la declaración jurada del domicilio real, haciéndose constar que en caso de falsedad se procedería a la cesantía. Explícitamente se argumentaba que la medida era una “acción psicológica” para “obstruir el accionar de los activistas fabriles y alterar sus planes en lo que respecta a la movilización proyectada”. Asimismo se indicaba que se complementaría con “controles

constituyó una comisión local, que se encargó de recibir las denuncias en el territorio y elaborar informes parciales, que luego se concentraron a nivel nacional.

⁹ *Nunca Más, Informe, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (CONADEP), Buenos Aires: Eudeba, 1984, p. 375; *Informe Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (CONADEP) delegación Córdoba, Córdoba, 1984, p. 109.

¹⁰ *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Programa Verdad y Justicia), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Área de Economía y Tecnología), Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, 2015, tomo II, p. 215.

¹¹ Archivo Provincial de la Memoria (APM), Policía Federal Argentina (PFA), Radiograma (Rad.), Córdoba, 10/05/1976, DGI.cd N° 232 S. Para favorecer la fluidez de la lectura, en las notas subsiguientes sólo se indicará el tipo, número y fecha del documento; todos pertenecientes a la misma serie documental.

colectivos” que se realizarían con las listas confeccionadas con los nombres de los operarios y sus direcciones reales, para detectar si las razones del ausentismo eran valederas para la empresa (enfermedad, por ejemplo) o se debían a razones de persecución política.¹² En los primeros meses después del golpe de Estado en Fiat se registraba un ausentismo de entre un 8% y un 11% en las tres plantas,¹³ lo que generaba una preocupación empresaria para sostener los ritmos productivos, en un momento en el que justamente estos se aceleraban cada vez más. Ciertamente gran parte del ausentismo se debía a que los activistas temían estar señalados como “subversivos” y ser secuestrados desde el lugar de trabajo. Por ello la función del ejército y la policía era la “búsqueda de información atinente a la detección de activistas” en las principales fábricas de Córdoba: Renault, Fiat, Forja, Transax, Perkins, entre otras.¹⁴

En los meses sucesivos ese trabajo de inteligencia comenzó a dar frutos: en septiembre de 1976 detuvieron a un obrero en la puerta de GMD repartiendo volantes de la CGT en la Resistencia,¹⁵ organización sobre la que profundizaremos más adelante. Por este hecho seis operarios se presentaron ante la dirección empresaria pidiendo información sobre la detención de su compañero: todos fueron identificados, catalogados como activistas y ex delegados, incluso algunos vinculados a la izquierda. Tres de ellos fueron detenidos en la planta mientras los otros huyeron del procedimiento: según las fuentes policiales “lograron eludir la acción del personal policial y militar, presumiblemente escondiéndose en algún lugar del establecimiento”.¹⁶ Debido a estos acontecimientos la Guardia de Infantería custodió los alrededores de la planta para evitar “alteraciones al orden”. En su operativo detuvieron a nueve personas que se encontraban “merodeando en actitud sospechosa”, quienes también fueron trasladadas al Departamento II de Informaciones de la Policía local, junto a los obreros detenidos antes. Algunos de ellos fueron liberados luego de ser identificados, pero otros quedaron a disposición del Área 311 del Ejército.¹⁷

En el contexto de este conflicto el Ejército montó un “operativo ventilador” en cercanías a la planta en Ferreyra, con el fin de disciplinar a los trabajadores a partir del terror. Según sus propias explicaciones, efectivos militares se encontraron con dos “delincuentes subversivos” que distribuían panfletos en las inmediaciones de Fiat, huyeron ante la presencia militar pero fueron perseguidos. Intentaron resistir disparando armas de fuego y lanzando una granada que no explotó, por lo que tuvieron que ser abatidos.¹⁸ El relato de este último documento es característico de los informes del

¹² Memorándum (Mem.), 12/05/1976, DGI.cd N° 68 “R”; Rad., 23/05/1976, DGI.cd N° 268 S.I.

¹³ Mem., 27/04/1976, DGI.cd N° 50 “R”; Mem., 05/05/1976, DGI.cd N° 61 “R”.

¹⁴ Mem., 22/06/1976, DGI.cd N° 107 “R”.

¹⁵ Rad., 21/09/1976, DGI.cd N° 684 S.I.

¹⁶ Rad., 22/09/1976, DGI.cd N° 693 S.I.

¹⁷ Rad., 22/09/1976, DGI.cd N° 693 S.I.

¹⁸ Rad., 23/09/1976, DGI.cd N° 694 S.I. Vid informe *Responsabilidad empresarial...* tomo II, pp. 242-243.

Ejército para legalizar ejecuciones sumarias por razones políticas, que en los años del terrorismo de Estado se multiplicaron por miles. Se trataba de asesinatos ocurridos en muchos casos en centros clandestinos de detención, que luego eran colocados en la vía pública y fraguados los informes para simular enfrentamientos inexistentes.

En el caso de uno de los activistas detenidos por estar presuntamente a cargo de repartir panfletos en un ómnibus, el Comandante del III Cuerpo de Ejército determinó que no tenía vínculo con la “subversión”, luego de los interrogatorios a otros trabajadores secuestrados. Por ello Menéndez ordenó su libertad y solicitó a Fiat que lo reintegrara a su puesto y se le abonaran los jornales de los días en que estuvo detenido, lo que fue aceptado por la empresa.¹⁹ Este dato se suma a muchos otros que evidencian la connivencia entre el ejército y las direcciones empresarias (Basualdo, 2017; Schorr, 2013). Cada vez que la empresa lo requería, el ejército apoyaba la seguridad interna de la fábrica para evitar “alteraciones al orden”, o sea, identificar activistas y efectuar detenciones ante la menor acción.²⁰ Asimismo, las patronales echaron mano a una táctica tradicional en las relaciones capital-trabajo: los traslados entre distintas secciones, talleres y fábricas de la misma firma. Según la documentación de inteligencia de la PFA, estos movimientos se realizaban “con el objeto de aislar activistas y agitadores”.²¹ Otra estrategia empresarial para menguar el descontento obrero solía ser el otorgamiento de aumentos salariales, aunque en menor proporción al solicitado por los trabajadores. Según las evaluaciones que hacían las fuerzas represivas esas medidas “constituyen un factor de desahogo para los trabajadores y, a la vez, concurre a quitar ‘banderas’ a los agitadores que ven cada vez más dificultado su accionar en el complejo Fiat”.²²

También el ministerio de Trabajo de la Nación fue parte de la maquinaria represiva, ya que a pesar del golpe de Estado que suspendió el funcionamiento institucional, la entidad continuó constatando las medidas de acción directa que realizaban los obreros y, a pedido de la Empresa, los intimaba a normalizar sus tareas.²³

Junto con las modalidades políticas de la represión del PRN, el cambio de modelo económico que se estaba imponiendo en todo el país comenzó a golpear al sector obrero. Ciertamente estas transformaciones se correspondían con una mudanza en las relaciones de poder en la economía mundial occidental que se venía manifestando desde la década de 1960 pero que se aceleraron con la crisis del petróleo en 1973, evidenciado en recesión, inflación, desaceleración de la productividad y

¹⁹ Rad., 24/09/1976, DGI.cd N° 697 S.I.

²⁰ Otros pedidos similares se registraron en: Rad., 29/04/1977, DGI.cd N° 344 S.I.; Rad., 20/05/1977, DGI.cd N° 415 S.I.

²¹ Rad., 14/06/1976, DGI.cd N° 343 S.I.

²² Rad., 01/12/1976, DGI.cd N° 985 S.I. Otras apreciaciones similares en: Rad., 05/04/1979, DGI.cd N° 121 S.I.

²³ Rad., 07/10/1976, DGI.cd N° 761 S.I. Se sabe que el Ministerio de Trabajo de la Nación delegación Córdoba tiene un archivo con documentación de aquellos años pero está cerrado al público.

de los márgenes de ganancias capitalistas (Peralta Ramos, 2007). Pero más allá de estas contingencias generales, el cambio de modelo económico nacional no derivó de un agotamiento de la industrialización por sustitución de importaciones, sino por la instauración de un nuevo gobierno de facto que sostenía las necesidades del bloque social dominante, que en la década previa al golpe de Estado venía perdiendo poder frente al sector asalariado (Basualdo, 2006). Por ello la política económica del PRN en lo industrial favoreció a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas, para quienes la subsistencia dependió de la alianza con un grupo financiero, la importación de sus producciones o la reducción al máximo de la actividad (Peralta Ramos, 2007: 175). A pesar de ello, una gran empresa como Fiat, que incluso se fusionó con Peugeot en 1980, disminuyó su producción y sostuvo a lo largo de todo el período una serie de medidas por acumulación de stock en sus establecimientos cordobeses. Se reordenaron tareas entre las plantas, se redujeron las jornadas de trabajo a algunos días de la semana, se suspendieron las horas extras, se otorgaron licencias obligatorias para todos los trabajadores juntos e incluso hubo cierres de planta por un par de días. Estas medidas repercutían en los trabajadores con una rebaja de entre un 25% y hasta un 50% del salario.

El descenso de la producción industrial cordobesa durante el PRN fue muy notable. La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informaba que la disminución en la producción cordobesa durante el primer semestre de 1976 en comparación con el mismo período de 1975 era de un 27,7%.²⁴ Claramente esta situación no afectaba únicamente a Fiat ni a la industria mecánica en especial, sino que era parte de una transformación estructural. En agosto de 1976 los organismos de inteligencia hicieron un listado de 62 casos de establecimientos de la provincia de Córdoba que desde el 24 de marzo de ese año habían tomado medidas en contra de los trabajadores como licencias, despidos y suspensiones.²⁵ En ese marco de fuerte caída de la producción local, Fiat Concord suspendió a 3800 obreros por exceso de stock entre el 12 y el 30 de julio de 1976, continuando en agosto y octubre del mismo año.²⁶

En 1978, debido a la aceleración de la crisis en el sector mecánico, Fiat volvió a establecer programas de suspensiones por acumulación de stock. Durante todo enero no se trabajó los días viernes y en febrero otorgaron la licencia anual a todo el personal, mientras en junio suspendieron el trabajo dos días a la semana, achicando la producción a un tercio de lo “normal”. Así continuaron

²⁴ Rad., 05/08/1976, DGL.cd N° 513 S.I.

²⁵ Mem., 06/08/1976, DGL.cd N° 146 “R”.

²⁶ Mem., 29/06/1976, DGL.cd N° 114 “R”; Rad., 06/07/1976, DGL.cd N° 419 S.I.; Rad., 05/10/1976, DGL.cd N° 743 S.I.

hasta mediados de 1980.²⁷ Al mismo tiempo, la patronal inició una política de cesantías encubiertas: según recogían los informantes policiales “la empresa estaría llamando a sus operarios y les ofrece una indemnización si renuncian, caso contrario se les declara prescindibles”.²⁸ También continuaron despidos de pocas personas por semana y dedicación de personal calificado a tareas de mantenimiento y limpieza, acreditando que tanto maquinarias como obreros se encontraban ociosos.²⁹ En octubre volvieron suspender dos días la actividad en Concord, y ante los reclamos de los trabajadores, despidieron a cinco obreros considerados activistas “agitadores”.³⁰ De nuevo en 1980 se trabajaba cuatro días a la semana por acumulación de stock, abonándose un 50% del salario.³¹ Lo mismo sucedió en enero de 1981, cerrando la planta cinco días al mes y liquidando el 50% del salario.³² Entre marzo y septiembre de ese año aconteció de nuevo: se suspendió a casi todo el personal (entre 2500 y 1500 operarios) en distintos días, abonándoseles el 50% del salario. Además, en ese período se enviaron 301 telegramas de despido por reducción de personal.³³

En 1980 la fusión de Fiat con Peugeot (formando SEVEL) también generó nuevos despidos, tanto de administrativos como de operarios.³⁴ En ese contexto, el achicamiento de la industria afectaba al sector metalúrgico de una manera desesperante: en el primer semestre del año 15 empresas metalúrgicas habían despedido entre 3 y 70 operarios, sumando en total 366, de los cuales 80 eran de Fiat. Asimismo, en el mismo período 21 firmas suspendieron personal entre 10 y 30 días, que en el caso de Fiat afectó a 2324 obreros.³⁵ En el marco de la Guerra de Malvinas, entre abril y junio de 1982, SEVEL despidió a 15 operarios y continuó con un cronograma de suspensiones, lo que fue denunciado por la comisión interventora de la UOM como “una agresión de la empresa multinacional (...) en concordancia con la actitud de su metrópoli, ligada a su vez con los intereses colonialistas que hoy pretenden agredir a Argentina a través de la Comunidad Económica Europea”.³⁶

²⁷ Rad., 03/01/1978, DGLcd N° 4 S.I.; Rad., 05/01/1978, DGLcd N° 13 S.I.; Rad., 06/06/1978, DGLcd N° 325 S.I.; Rad., 15/06/1978, DGLcd N° 344 S.I.; Rad., 11/08/1978, DGLcd N° 402 S.I.; Mem., 16/08/1978, DGLcd N° 135 “R”; Mem., 31/07/1980, DGLcd N° 104 “R”.

²⁸ Rad., 26/01/1978, DGLcd N° 74 S.I.; Mem., 15/02/1978, DGLcd N° 31 “R”.

²⁹ Mem., 05/10/1978, DGLcd N° 177 “R”; Rad., 03/11/1978, DGLcd N° 505 S.I.

³⁰ Rad., 19/10/1978, DGLcd N° 489 S.I.

³¹ Rad., 06/08/1980, DGLcd N° 597 S.I.

³² Rad., 21/01/1981, DGLcd N° 47 S.I.; Rad., 21/01/1981, DGLcd N° 43 S.I.

³³ Rad., 19/02/1981, DGLcd N° 118 S.I.; Rad., 04/03/1981, DGLcd N° 157 S.I.; Rad., 17/03/1981, DGLcd N° 191 S.I.; Rad., 23/03/1981, DGLcd N° 208 S.I.; Rad., 23/03/1981, DGLcd N° 208 S.I.; Rad., 08/04/1981, DGLcd N° 264 S.I.; Rad., 14/04/1981, DGLcd N° 280 S.I.; Rad., 07/05/1981, DGLcd N° 327 S.I.; Rad., 04/06/1981, DGLcd N° 409 S.I.; Rad., 02/06/1981, DGLcd N° 402 S.I.; Rad., 10/08/1981, DGLcd N° 969-551 S.I.; Rad., 01/09/1981, N° 969-622 S.I.; Rad., 21/09/1981, DGLcd N° 969-669 S.I.

³⁴ Mem., 31/07/1980, DGLcd N° 104 “R”.

³⁵ Rad., 18/08/1980, DGLcd N° 642 S.I.

³⁶ Rad., 19/04/1982, N° 969-13-000371-82; Rad., 06/05/1982, N° 969-13-000428-82; Rad., 13/05/1982, N° 969-13-000442-82; Rad., 19/05/1982, N° 969-13-000451-82; Rad., 21/05/1982, N° 969-13-000457-82; Rad., 31/05/1982, N° 969-13-000435-82; Rad., 02/06/1982, N° 969-13-000474-82; Rad., 04/06/1982, N° 969-13-000478-82.

Ante estas modalidades represivas, los trabajadores reaccionaron de diferente manera, de acuerdo al horizonte de su propia experiencia y las condiciones de posibilidad que el contexto político imponía.

Acciones, posiciones y formas de organización obrera en Fiat

Los cambios en los repertorios de confrontación de los trabajadores de Fiat fueron modificados por el PRN (1976-1983), aunque como ya se ha mencionado, la conflictividad obrera había iniciado antes. En los meses previos al golpe de Estado de 1976, en Fiat existían dos tipos de organización obrera: los cuerpos de delegados que respondían a la UOM, identificados con el peronismo ortodoxo, y los que se habían formado en contra de ellos, tratando de reconstituir el sindicalismo clasista. Estos segundos habían organizado quites de colaboración en Materfer en octubre de 1975, reduciendo la productividad a un 30% del habitual. Por ello la empresa Fiat había cerrado por unos días, pensando que el *lock-out* calmaría el descontento.³⁷ En los días previos al 24 de marzo de 1976, los reclamos obreros coordinados desde la Mesa de Gremios en Lucha –que incluían a las bases de Fiat- se orientaban en contra del plan Mondelli, ya que la represión económica venía rebajando el salario obrero. Por ello las peticiones se orientaban a aumentos salariales de hasta un 80%.³⁸

Antes del 24 de marzo en GMD y Materfer se realizaban disminuciones de producción de entre un 50 y un 75%. La diferencia es que antes del 24 de marzo podían manifestarse en asamblea en el lugar de trabajo y el Cuerpo de Delegados actuaba como tal. En Materfer incluso habían realizado un abandono de tareas de un par de horas por turno y proyectaron un paro de 48 horas para los días 22 y 23 de marzo de 1976.³⁹ En cambio, después del 24 de marzo ya no fue posible mantener acciones visibles como paros, asambleas y abandonos, pero sí se sostuvieron las disminuciones de producción por un 10% o 15% con trabajo a desgano y la no realización de horas extras. Tal fue el caso de GMD y Materfer unos días después del 24 de marzo, según fuentes policiales, debido al malestar que provocaba el pedido de aumento salarial sin obtener respuestas de la empresa.⁴⁰ En los meses siguientes la situación continuó con altibajos, pero en octubre todavía la empresa se quejaba

³⁷ Rad., 20/10/1975, DGI.cd N° 205 S.I.

³⁸ Rad., 19/03/1976, DGI.cd N° 113 S.I. La Mesa de Gremios en Lucha era una coordinadora sindical identificada con el clasismo que se había formado en 1974 en Córdoba con el fin de establecer redes entre activistas de sindicatos intervenidos o que no tenían reconocimiento institucional (Ortiz, 2019: 352-354). El Plan Mondelli consistió en un paquete de medidas antiinflacionarias impuestas por el entonces ministro de Economía. Fundado en una mirada económica ortodoxa, propuso aumentos en las tarifas de hasta un 150%, una devaluación del peso del 22% y un incremento salarial del 12%. A pesar de imponer un período de 180 días de “tregua social”, las movilizaciones obreras en su contra no se hicieron esperar.

³⁹ Rad., 18/03/1976, DGI.cd N° 112 S.I.

⁴⁰ Rad., 13/04/1976, DGI.cd N° 161 S.I.; Rad., 22/04/1976, DGI.cd N° 188 S.I.

que en Materfer la producción rondaba en un 60% de lo normal “notándose el accionar de activistas y la estructuración de comisiones internas clandestinas”.⁴¹

Los reclamos por el salario llevaban a discutir los precios de la canasta básica y de los precios de los comedores de la fábrica, por lo que otra de las modalidades de acción eran los boicots al comedor de la fábrica en protesta por sus precios.⁴² También se manifestaron con cánticos de descontento contra el gobierno en momentos del pago de la quincena.⁴³

Aunque los reclamos salariales tuvieron momentos de mayor tensión y otros donde disminuía, lo que se consideraba “normalidad” en la producción durante todo el período estaba teñido de descontento y expresiones de disconformidad.⁴⁴ Ello se debía por un lado a la situación de crisis económica, pero también porque los trabajadores industriales tenían una experiencia de lucha y organización en los años previos que dificultaba el sometimiento social que el PRN pretendía instaurar. Obviamente, las condiciones de posibilidad que el contexto represivo imponía, condicionaron las formas de actuación obrera a movimientos subterráneos. Los servicios de inteligencia de la PFA reconocían que, a pesar de la estricta vigilancia del personal de seguridad de la empresa, se detectaba que en las distintas plantas se realizaban reuniones clandestinas entre obreros, entre dos y tres personas, simulando trabajar, o en los baños.⁴⁵

En los primeros tiempos después del 24 de marzo, inteligencia de la PFA registraba que en Materfer la mayoría de los representantes obreros eran peronistas ortodoxos y los de Concord eran activistas de izquierda.⁴⁶ Estos últimos estaban identificados con la Mesa de Gremios en Lucha y, como tales, intentaron por un tiempo sostener la organización de las bases en pro de la defensa de los intereses obreros. En mayo de 1976 los organismos de inteligencia se quejaban de una intensificación en la distribución de volantes firmados por la Mesa de Gremios en Lucha exhortando a la movilización que procuraron generar en conmemoración del Cordobazo, acción que no se pudo realizar.⁴⁷ Según las auscultaciones de los informantes las volanteadas eran constantes pero en pocas unidades que se propagaban “a modo de pasamano”, probablemente porque los controles en el ingreso de los establecimientos dificultaban el traslado de grandes cantidades e implicaban un inmenso riesgo en caso de una detención, tal como mencionamos al comienzo de este capítulo. Los panfletos de la Mesa de Gremios instaban a los trabajadores a resistir a la dictadura, que según sus palabras

⁴¹ Rad., 05/10/1976, DGI.cd N° 743 S.I.

⁴² Rad., 05/05/1976, DGI.cd N° 216 S.I.; Rad., 07/05/1976, DGI.cd N° 226 S.I.; Rad., 12/08/1976, DGI.cd N° 538 S.I.

⁴³ Rad., 06/05/1976, DGI.cd N° 219 S.I.; Rad., 21/01/1977, DGI.cd N° 44 S.I.; Rad., 28/01/1977, DGI.cd N° 58 S.I. Otra situaciones similares en: Rad., 05/04/1977, DGI.cd N° 262 S.I.; Rad., 06/10/1978, DGI.cd N° 475 S.I.

⁴⁴ Rad., 15/04/1977, DGI.cd N° 301 S.I.

⁴⁵ Mem., 27/04/1976, DGI.cd N° 50 “R”; Rad., 11/05/1977, DGI.cd N° 369 S.I.; Rad., 20/10/1978, DGI.cd N° 494 S.I.

⁴⁶ Rad., 06/05/1976, DGI.cd N° 219 S.I.

⁴⁷ Mem., 12/05/1976, DGI.cd N° 68 “R”.

representaba la defensa militar de la clase dominante para someter a los trabajadores. Llamaban a organizarse en contra de la represión política, representada en asesinatos y torturas, y también contra la represión económica, encarnada en la quita de derechos laborales, el aumento de las horas de trabajo y de los ritmos de producción, el congelamiento de salarios y la suba de los precios de los productos de primera necesidad. En concreto reclamaban un aumento salarial de emergencia, el cese de las intervenciones y la democratización de los sindicatos, la restitución del derecho a huelga y demás derechos cercenados, la libertad de los presos políticos y gremiales, el fin de los allanamientos, torturas, secuestros y asesinatos. En sus propios términos, señalaban el camino de la organización obrera desde las bases, en la fábrica y los barrios obreros.⁴⁸

En los meses siguientes fueron desapareciendo las expresiones de la Mesa de Gremios en Lucha, probablemente ya desarticulada, con la mayoría de sus activistas detenidos, secuestrados, exiliados, insiliados o en clandestinidad. Pero sí continuaron en actividad otras organizaciones políticas que tenían incidencia en los trabajadores de Fiat. Según los propios registros de los represores continuaban en actividad el PCR, la Liga Comunista, Orientación Socialista y la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Pero las dos organizaciones con mayor presencia eran Montoneros y el PRT-ERP.⁴⁹

Entre 1976 y 1977 los volantes del PRT-ERP demostraban su conexión con los trabajadores, ya que tenían un profundo conocimiento de los cambios que habían sucedido en el interior de la fábrica. Por ejemplo, se quejaban de que el Jefe de Personal de Concord no dejaba que los trabajadores hablasen entre ellos. También denunciaban despidos hormiga y traslados de obreros entre las distintas plantas, con el apoyo de los encargados, Jefes de Taller o de Sección. Llamaban a sabotear la producción para lograr aumentos salariales, reclamaban solución al pedido de insalubridad en la sección de Tratamientos Térmicos, la inmediata categorización, la libertad de los presos, el cese de despidos y suspensiones, y el restablecimiento de plenas libertades sindicales⁵⁰. También la organización Montoneros difundió su prensa y volantes en Fiat en ese tiempo, con títulos como “Resistencia popular a los milicos gorilas” e instando a organizarse. En algunos panfletos proponían formar clandestinamente Coordinadoras con delegados por secciones, fábricas y zonas, en otros comenzaron a bregar por organizar una CGT en la Resistencia y la UOM en la Resistencia.⁵¹ En

⁴⁸ Rad., 13/05/1976, DGI.cd N° 244 S.I.

⁴⁹ Rad., 01/06/1976, DGI.cd N° 293 S.I.; Rad., 01/12/1976, DGI.cd N° 985 S.I.

⁵⁰ Rad., 17/05/1976, DGI.cd N° 250 S.I. El término “despido hormiga” refiere a la tradición de cesantear en pequeñas cantidades por quincena o por mes, para fragmentar la organización obrera de resistencia a los despidos. Otros volantes, prensa y pintadas del PRT-ERP repartidos en Fiat con similares propuestas: Rad., 13/10/1976, DGI.cd N° 788 S.I.; Rad., 01/12/1976, DGI.cd N° 982 S.I.; Rad., 15/04/1977, DGI.cd N° 297 S.I.; Rad., 27/05/1977, DGI.cd N° 437 S.I.; Rad., 06/10/1978, DGI.cd N° 475 S.I. Después de 1978 ya no aparecen más documentos que los mencionen.

⁵¹ Argañaraz, Jorge, obrero de Fiat y militante de Montoneros, entrevista realizada en Córdoba el 09/05/2015 por Laura Ortiz.

cualquiera de los casos, argumentaban que se debía luchar por el congelamiento de precios y un aumento salarial, exigiendo el respeto de las conquistas obreras, repudiando las intervenciones a los sindicatos y agregando, algo novedoso en agosto de 1976, el “respeto a los derechos humanos”. También recomendaban aplicar todas las herramientas a disposición para luchar dentro de las fábricas: el sabotaje y la disminución de los ritmos de producción.⁵² Hacían pintadas en los baños de las fábricas, apuntando frases como “Simó-Videla te quedan pocos días. Resistencia activa contra los milicos gorilas”.⁵³

Hasta 1978 los organismos de inteligencia tenían claro que el activismo era fuerte todavía en las fábricas y que trabajaba para movilizar a las bases.⁵⁴ En efecto, a los pocos días que Montoneros lanzó la convocatoria para formar la UOM en la Resistencia, con un formato organizativo y una serie de demandas que debía encarar la organización, apareció en los transparentes de Fiat Materfer un petitorio firmado por “Trabajadores de Materfer” con algunas de las peticiones que había señalado Montoneros: aumento salarial para obreros y empleados del 38%, la categorización del personal y una bonificación del 100% para gastos de transporte, comedor y medicamentos.⁵⁵ En la misma época en Concord también una Junta Promotora de la UOM en la Resistencia impulsó la presentación de petitorios casi con las mismas demandas que el anterior: un aumento salarial del 50% y categorizaciones, garantías de que no se realicen despidos y la gratuidad del transporte y comedor. En este caso el petitorio fue entregado a la dirección empresaria en la mano, y según denunció la organización obrera, no sólo no respondieron a los reclamos sino que además ordenaron la detención de los dos obreros encargados de esa presentación.⁵⁶ A los pocos días de estos petitorios se anunció el despido de 24 operarios de Materfer, señalados “como activistas de la Unión Obrera Metalúrgica en la Resistencia y que fueron detectados por la empresa, introduciendo algunos de ellos material dentro de la fábrica”.⁵⁷ Sin embargo, las pintadas en los baños de Materfer continuaron en los meses siguientes: algunas firmadas por Montoneros con el pliego de reivindicaciones ya establecido,

⁵² Rad., 10/06/1976, DGI.cd N° 330 S.I.; Mem., 10/06/1976, DGI.cd N° 96 “R”; Rad., 10/08/1976, DGI.cd N° 529 S.I.; Rad., 09/09/1976, DGI.cd N° 651 S.I.

⁵³ Alejo Simó fue Secretario General de la UOM desde la década de 1960 y entre 1974 y 1976 fue el Delegado regional del ministerio de Trabajo de la Nación. Era uno de los principales referentes del sindicalismo peronista ortodoxo. Jorge Rafael Videla fue el primer presidente de la Junta de Comandantes del gobierno militar. Rad., 01/09/1976, DGI.cd N° 613 S.I. Otra situación similar en: Rad., 01/03/1977, DGI.cd N° 143 S.I.

⁵⁴ Mem., 26/05/1976, DGI.cd N° 80 “R”; Mem., 25/08/1976, DGI.cd N° 158 “R”; Rad., 15/09/1976, DGI.cd N° 662 S.I.; Rad., 20/04/1977, DGI.cd N° 317 S.I.

⁵⁵ Rad., 16/09/1976, DGI.cd N° 665 S.I.

⁵⁶ Rad., 20/09/1976, DGI.cd N° 682 S.I.

⁵⁷ Rad., 08/10/1976, DGI.cd N° 770 S.I. Luego de un par de meses los informantes de la policía recogieron rumores de que ese núcleo de despedidos de Materfer se estaba organizando en un grupo denominado Movimiento de Resistencia y Recuperación Sindical, con el fin de continuar activando la resistencia a la dictadura en la fábrica. Rad., 08/03/1977, DGI.cd N° 160 S.I.

incluyendo amenazas contra guardias, capataces y dirigentes empresariales y políticos⁵⁸, pero también otras pintadas “anti-subversivas” en contra de ellos, del estilo: “Levantemos el país, trabajando más y mejor. Saquémoslo del pozo donde lo metieron los peronistas imbéciles e inútiles. Que los militares no tienen la culpa. Donde están los del ERP, los Montoneros y su familia. Un argentino”.⁵⁹ Sin embargo la UOM en la Resistencia siguió alentando las acciones obreras clandestinas, sumando al trabajo a desgano, el sabotaje a la producción: arruinando máquinas, cortando asientos de autos, incendiando repuestos o rayando revestimientos.⁶⁰

Otras medidas de acción obrera fueron los abandonos de fábrica, aunque en menor cantidad respecto de épocas anteriores. En noviembre de 1976 los obreros de Concord hicieron uno en solidaridad con los trabajadores de Renault que reclamaban un aumento salarial. Allí también se estaba formando el SMATA en la Resistencia, que proponía reclamos similares a los que hacía la UOM en la Resistencia.⁶¹ Entre fines de marzo y comienzos de abril de 1977 otra vez hubo una conflictividad similar: los obreros de GMD, Materfer y Concord reclamaron a las patronales por desconocer el aumento salarial que el gobierno había dispuesto. Por ello realizaron trabajo a desgano, paro de dos horas por turno dentro del establecimiento, asambleas en el comedor de la fábrica, la presentación de petitorios y pintadas en los baños.⁶² En respuesta la empresa despidió a ocho trabajadores, seguramente identificados como activistas. Algunos de ellos comenzaron a reclamar la reincorporación pero otros prefirieron ser indemnizados.⁶³

La actuación de los activistas que firmaban como “Trabajadores de Materfer” continuó entre junio y septiembre de 1977. En junio volvieron a presentar un petitorio para reclamar un aumento salarial del 80% y otras reivindicaciones en relación a las categorizaciones y bonificaciones por transporte, comedor y medicamentos. Como la empresa los ignoró, se escucharon cánticos y palabras injuriosas contra directivos de la empresa, además del trabajo a desgano y pintadas en los baños.⁶⁴ En respuestas a esas acciones, la empresa suspendió a 12 obreros de GMD que encontraron en los baños en horario de trabajo, aunque aclarando que estaban jugando ajedrez o durmiendo.⁶⁵ Luego de eso se fueron normalizando las tareas en GMD y Materfer. Concord fue la última planta que sostuvo el

⁵⁸ Rad., 15/10/1976, DGL.cd N° 795 S.I.; Rad., 14/12/1976, DGL.cd N° 1011 S.I.; Rad., 12/05/1977, DGL.cd N° 377 S.I.; Rad., 09/06/1977, DGL.cd N° 471 S.I.; Rad., 25/08/1977, DGL.cd N° 743 S.I.

⁵⁹ Rad., 21/10/1976, DGL.cd N° 823 S.I.

⁶⁰ Rad., 07/10/1976, DGL.cd N° 760 S.I.

⁶¹ Rad., 26/11/1976, DGL.cd N° 972 S.I.

⁶² Rad., 22/03/1977, DGL.cd N° 200 S.I.; Rad., 23/03/1977, DGL.cd N° 207 S.I.; Rad., 23/03/1977, DGL.cd N° 211 S.I.; Rad., 30/03/1977, DGL.cd N° 237 S.I.; Rad., 04/04/1977, DGL.cd N° 259 S.I.

⁶³ Rad., 12/04/1977, DGL.cd N° 280 S.I.

⁶⁴ Rad., 29/06/1977, DGL.cd N° 523 S.I.; Rad., 06/07/1977, DGL.cd N° 552 S.I.; Rad., 08/07/1977, DGL.cd N° 568 S.I.; Rad., 22/07/1977, DGL.cd N° 626 S.I.; Rad., 12/08/1977, DGL.cd N° 706 S.I.; Rad., 16/08/1977, DGL.cd N° 716 S.I.; Rad., 18/08/1977, DGL.cd N° 719 S.I.; Rad., 24/08/1977, DGL.cd N° 741 S.I.

⁶⁵ Rad., 18/08/1977, DGL.cd N° 723 S.I.

trabajo a desgano, incluso luego del incremento salarial del 12% que dispuso Fiat en septiembre de 1977.⁶⁶

A partir de 1978 todas aquellas acciones resistentes de bases, ya sean clandestinas o públicas, fueron desapareciendo. En las dos grandes huelgas durante la dictadura (en abril de 1979 y marzo de 1982), los trabajadores de Fiat no tuvieron una participación activa. No así en diciembre de 1982, momento en que la UOM Nacional declaró un paro y la regional cordobesa acató. En este caso, la medida reclamaba un aumento salarial, el fin de la legislación laboral represiva y la normalización del sindicato. La adhesión fue de entre un 80% y un 85% en toda la rama metalúrgica local, siendo del 100% en Materfer y SEVEL, quienes participaron de una asamblea en la puerta del complejo de Ferreyra encabezada por el delegado normalizador del sindicato⁶⁷. Sin embargo la composición de los trabajadores había cambiado, los activistas de izquierda ya no aparecían en los documentos de inteligencia como un problema central sino que, al contrario, las fuerzas represivas evaluaban que el problema de la “subversión” en las fábricas había acabado.

Estructura sindical y proceso de normalización

Según las evaluaciones que hacían los servicios de inteligencia, hacia 1979 se consideraba que había llegado el momento de normalizar los sindicatos, ya que no había grandes riesgos de acciones directas de las bases obreras. El poder sindical se reactivó desde las cúpulas tradicionales que durante esos últimos años no habían tenido ninguna actividad pública. En esta coyuntura los documentos de inteligencia comenzaron a registrar a estos referentes gremiales en reuniones variadas, tratando de reunificar el movimiento obrero, sobre todo a partir de su raigambre peronista. Ya desde 1978 los informantes policiales daban cuenta de encuentros entre Alejo Simó y Mauricio Labat con otros dirigentes sindicales nacionales, con el fin de “aunar criterios que hagan a una mayor cohesión político-gremial y así poder contrarrestar a potenciales opositores en el campo por ellos dirigido”.⁶⁸

Si bien a nivel nacional la UOM se encontraba intervenida desde marzo de 1976 (Zorzoli, 2018: 500), en la seccional de Córdoba se mantuvo en la dirección a la cúpula sindical anterior, siendo su Secretario general Juan Carlos Romero. Pero con motivo de la Jornada Nacional de Protesta del 29 de abril de 1979, en vistas a que el principal dirigente metalúrgico había firmado el documento de adhesión a la misma, el interventor nacional de la UOM ordenó desplazar a la conducción de esta seccional y nombró como delegado normalizador a José González, quien hasta ese momento había

⁶⁶ Rad., 31/08/1977, DGI.cd N° 764 S.I.; Rad., 14/09/1977, DGI.cd N° 814 S.I.; Rad., 19/09/1977, DGI.cd N° 729 S.I.; Rad., 21/09/1977, DGI.cd N° 840 S.I.

⁶⁷ Rad., 13/12/1982, N° 969-13-000911-82; Rad., 15/12/1982, N° 969-13-000913-82.

⁶⁸ Rad. DGI.cd. N° 394 S.I., 03/08/1978. Tanto Simó como Labat eran representantes del núcleo peronista ortodoxo, en el caso de Labat era el histórico dirigente del Sindicato de Taxis.

sido titular de la Comisión Interna de Fiat. Según las fuentes consultadas, este cambio obedecía a razones “de imagen” más que de fondo, ya que González “sustenta el mismo criterio peronista que su antecesor”.⁶⁹

Aunque pareciera no tratarse de una intervención con fines de desarticulación de organizaciones sindicales combativas, tampoco la intromisión se trató de un típico proyecto de normalización sindical, según la clasificación que construyó Zorzoli (2018). Al contrario, la medida que tuvo que ver con conflictos internos a las cúpulas peronistas, ya que el recambio dirigencial hizo que el sector metalúrgico local tradicionalmente encabezado por Alejo Simó se viera desplazado de su espacio y por ello iniciase una gran cantidad de críticas a la dirigencia metalúrgica nacional. En efecto, el Cuerpo de Delegados de Fiat -alineado con la UOM local y nucleado en el Movimiento de Agrupaciones Metalúrgicas “José Ignacio Rucci”-, emitió varias declaraciones públicas donde apuntaba que la comisión interventora estaba formada por miembros que habían sido desplazados de la conducción gremial por haber llevado a la quiebra al sindicato. En particular apuntaban en contra de José González, a quien señalaban como “informante”⁷⁰ de los servicios de inteligencia. En respuesta, González resolvió retirar los permisos gremiales existentes en los distintos establecimientos, atacando especialmente a las comisiones internas.⁷¹

Las vinculaciones entre la dirigencia metalúrgica y los servicios de inteligencia tenían larga data en Córdoba, como mencionamos al comienzo de este trabajo. Sin embargo, las disputas hacia 1981 en la UOM local no tenían que ver con eso sino con el liderazgo. Por ello el sector liderado por Alejo Simó influyó en el gobierno provincial que ordenó una auditoría contable al sindicato metalúrgico en marzo de 1981, detectando cierta anormalidad en el manejo de los fondos sindicales.⁷² Por este hecho González fue removido del sindicato, dejando a Alfredo Perulero a cargo. Pero Alejo Simó se quejaba de que habían dejado al resto de la comisión que eran “partícipes” de la defraudación, y al poco tiempo fueron detenidos todos los miembros de la comisión normalizadora.⁷³ Luego se designó interinamente a Juan Andrés Orello, y finalmente fue nombrado Juan Bautista Mangas como delegado normalizador de la UOM.⁷⁴ El peso de Alejo Simó en la cúpula del gobierno local era evidente, ya que había sido delegado regional del ministerio de Trabajo entre 1974 y 1976, y en 1983

⁶⁹ Rad., 18/06/1979, DGI.cd N° 233 S.I.

⁷⁰ Rad., 29/06/1979, DGI.cd N° 268 S.I.

⁷¹ Rad., 03/07/1979, DGI.cd N° 273 S.I.; Rad., 11/08/1980, DGI.cd N° 608 S.I.; Rad., 18/08/1980, DGI.cd N° 629 S.I.; Rad., 27/08/1980, DGI.cd N° 665 S.I.

⁷² Rad., 02/03/1981, DGI.cd N° 148 S.I.

⁷³ Rad., 01/06/1981, DGI.cd N° 396 S.I.; Rad., 10/11/1981, N° 969-797 S.I.; Rad., 10/03/1982, N° 969-13-000227-82. A los pocos días fueron excarcelados en su mayoría, excepto González y otros dos miembros de la comisión normalizadora, que lo lograron unos meses más tarde. Rad., 24/03/1982, N° 969-13-000290-82; Rad., 13/07/1982, N° 969-13-000537-82.

⁷⁴ Rad., 12/03/1982, N° 969-13-000238-82; Rad., 19/04/1982, N° 969-13-000371-82.

fue candidato a vicegobernador junto a Raúl Bercovich Rodríguez, que había sido interventor federal en la provincia desde septiembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976.

En aquel contexto de la normalización sindical, hacia 1980, resurgieron nucleamientos de izquierda en el sector metalúrgico. Uno de ellos era el autodenominado “Trabajadores Socialistas de Fiat”, quienes emitieron volantes llamando a la organización de las bases, sección por sección, para convocar a asambleas y huelgas donde se enfrentase a la patronal.⁷⁵ Por otro lado apareció en varias oportunidades el periódico “La Mulita”, identificado con los trabajadores comunistas de Fiat. Con un lenguaje propio de las organizaciones de izquierda, en sus notas se criticaba la política económica de Martínez de Hoz, se comentaban conflictos políticos en América Latina y, sobre todo, se examinaba cómo la situación de crisis en Fiat afectaba a los trabajadores. Criticaban las políticas de “reacomodamiento” de la empresa luego de la fusión con Peugeot por considerarla antiobreras. Pedían el cese de suspensiones y despidos, un aumento salarial de emergencia del 30% y la normalización sindical. También reclamaron una respuesta sobre el paradero de Néstor Gilberto Lellin, desaparecido en 1976”.⁷⁶

Es sintomático que sólo las organizaciones de izquierda reclamaran por la aparición con vida de los desaparecidos, algunas incluso tan tempranamente como en 1977.⁷⁷ En 1981 aparecieron en SEVEL volantes firmados por “Trabajadores comunistas” que reclamaba que la crisis no debían pagarla los trabajadores sino “los grandes monopolios, la oligarquía terrateniente y financiera”. Exhortaban a organizarse en los lugares de trabajo para “reconquistar lo que nos han arrebatado” y entre las reivindicaciones, además del aumento salarial y la defensa de las 8 horas de trabajo, exigían la normalización sindical democrática y “la vigencia de las libertades democráticas, libertad a los presos políticos sin causa y esclarecimiento de la situación de los desaparecidos”.⁷⁸ A juzgar por la principal fuente consultada, en este período las apariciones de la izquierda fueron marginales y no generaron acciones concretas de protesta en la masa obrera, siendo el sector peronista ortodoxo el principal interlocutor sindical legitimado desde el poder. Estos dirigentes y sus nucleamientos sindicales no se pronunciaron nunca en defensa de los Derechos Humanos o pidiendo justicia por las desapariciones que afectaron fuertemente su sector. Tampoco reclamaron por el ajuste que los había aquejado con el cambio de modelo económico impulsado por la dictadura. Al contrario, sus demandas tenían que ver con la normalización sindical, en vistas a recuperar aquellos espacios institucionales perdidos. Por ello fueron un interlocutor que resultaba útil al gobierno militar en transición, como

⁷⁵ Rad., 11/08/1980, DGI.cd N° 608 S.I.

⁷⁶ Rad., 19/09/1980, DGI.cd N° 704 S.I.; Rad., 13/11/1980, DGI.cd N° 813 S.I.; Rad., 07/05/1981, DGI.cd N° 325 S.I.

⁷⁷ Rad., 21/04/1977, DGI.cd N° 323 S.I.

⁷⁸ Rad., 06/05/1981, DGI.cd N° 319 S.I.

sucedió en Buenos Aires (Molinero, 2016), ya que estas cúpulas sindicales garantizaban restablecer el “orden” en las estructuras sindicales.

Conclusiones

En este trabajo se han examinado las transformaciones en Fiat durante el terrorismo de Estado. Aunque se advierte que la mayoría de los cambios no fueron exclusivos de Fiat sino que se reprodujeron en distintos sectores productivos de Córdoba y del resto del país, se sostiene que la reducción de la escala de análisis favorece a la comprensión de fenómenos más estructurales. La reconstrucción de estas historias se fundamentó en el análisis exhaustivo de documentación interna de los servicios de inteligencia de la PFA con sede en Córdoba, una forma de acceso privilegiado a información que no circulaba en otros medios en aquellos años. Sin embargo, no se puede desconocer que la producción de esa información perseguía el fin de la identificación de “subversivos” en las fábricas para su posterior represión, elaborando un discurso legitimador de su función en el marco del PRN. No obstante, a partir de un profundo examen y una lectura a contrapelo de las intenciones de su producción, se reconoce en estos registros una fuente extraordinaria para conocer qué quedó del clasismo a partir del nuevo contexto abierto el 24 de marzo de 1976, cuáles fueron sus nuevos desafíos y posibilidades.

Por un lado se han analizado las políticas represivas implementadas en Fiat Córdoba, considerando al terrorismo de Estado como el resultado de la conjunción de necesidades del bloque social dominante que requirió de ajustes represivos en lo económico y en lo político, afectando de manera compleja a la sociedad en su conjunto y al sector obrero especialmente. Las desapariciones de trabajadores de Fiat, tanto desde el lugar de trabajo como desde los domicilios particulares, se combinaron con una serie de políticas que achicaron el salario real y los derechos laborales. Si bien a los efectos analíticos se han separado las estrategias represivas de las acciones obreras, lo cierto es que a lo largo del trabajo se advierte que unas y otras no sólo estuvieron relacionadas sino que se condicionaron mutuamente, estableciendo horizontes de posibilidad para las expresiones y acciones obreras en los márgenes de la clandestinidad y el anonimato.

A partir de lo que se colige de las fuentes consultadas, se reconoce que las acciones obreras de protesta tuvieron mucha importancia hasta 1979, sugiriendo un hilo de continuidad con el período previo en que las organizaciones obreras de Fiat habían adoptado una identidad clasista. Al igual que en aquel período anterior, sería infructuoso intentar clasificar las acciones de protesta obrera entre aquellas que eran más políticas, en contra de la dictadura en estos años, de las acciones por motivaciones inmediatas o salariales; en tanto unas y otras estuvieron en consonancia por el cambio de modelo económico que el PRN sostuvo. No obstante, a partir de 1980 las apariciones de los

activistas clasistas fueron esporádicas y marginales, probablemente por la eficacia de los dispositivos represivos implementados por la dictadura. Al mismo tiempo, las dirigencias peronistas ortodoxas resurgieron de su silencio mantenido durante los primeros años y se repositionaron para negociar las normalizaciones sindicales en la transición a la democracia.

Bibliografía

Archenti, Nélica (2018): “Estudio de caso/s”. En: *Manual de metodología de las ciencias sociales*, Alberto Marradi, Nélica Archenti y Juan Ignacio Piovani, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, pp. 291-303.

Basualdo, Eduardo M. (2006): “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera”. En: *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*, Eduardo Basualdo y Enrique Arceo. Buenos Aires: CLACSO.

Basualdo, Victoria (2017): “Responsabilidad empresarial en la represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado: avances recientes sobre la dictadura argentina (1976-1983) en un marco regional e internacional”, *La Rivada* 5 (9), 14-29.

Bianco, Diana y Brandolini, Carolina (2019): “Represión en el mundo del trabajo durante los '70. El caso de la empresa Fiat Concord Sauce Viejo”. *III Coloquio Internacional sobre violencia política en el siglo XX / IV Jornadas de la Red de Estudios sobre Represión y violencia política*, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Brennan, James (1992): “El clasismo y los obreros. El contexto fabril del “sindicalismo de liberación” en la industria automotriz cordobesa, 1970-75”. *Desarrollo Económico* 32 (125), 3-22.

Brennan, James y Gordillo, Mónica (2008): *Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movilización social*. Buenos Aires: De la Campana.

Di Rienzo, Gloria; Céspedes, Florencia; Cocilovo, Agustín; Lescano, Melisa; Ortiz, María Laura y Puttini, María Paula (2012): *Lucha gremial y represión fabril. Para un homenaje a los obreros desaparecidos de la zona del cordón industrial de Ferreyra*, Córdoba. Publicación e investigación dirigida por la Dirección de Secuelas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba [mimeo].

Duval, Natalia (2001): *Los sindicatos clasistas: SITraC (1970-1971)*. Córdoba: Fundación Pedro Milesi.

Flores, Gregorio (2004): *SITRAC-SITRAM. La lucha del clasismo contra la burocracia sindical*. Córdoba: Editorial Espartaco Córdoba.

- Galli, Marianela (2018): “Procesos de trabajo, conflictividades, represión y responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad contra trabajadores en las fábricas de Fiat, Argentina (1974-1983)”. *Workshop Clase Obrera y Dictadura Cívico-Militar*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- Kahan, Emmanuel (2007): “¿Qué represión, qué memoria? El ‘archivo de la represión’ de la DIPBA: Problemas y perspectivas”. *Questión* 16 (1), UNLP.
- Marengo, María Eugenia (2015): *Lo aparente como real: un análisis del sujeto comunista en la creación y consolidación del servicio de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, 1930-1962*. UNLP, UNGS, UNL. E-book.
- Marengo, María Eugenia y Castronuovo, Sabrina (2015): “El archivo policial como espacio de memoria: un sondeo por el ex archivo de la DIPPBA”. *Revista Electrónica de Fuentes y Archivos* 6 (6), 106-125.
- Molinari, Leandro (2016): “El reposicionamiento de la burocracia sindical en el ocaso del ‘Proceso’ (julio de 1982-diciembre de 1983)”. *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda* 8 (4), 33-53.
- Ortiz, María Laura (2019): *Con los vientos del Cordobazo. Los trabajadores clasistas en tiempos de violencia y represión*. Córdoba: Editorial UNC.
- Peralta Ramos, Mónica (2007): *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. Buenos Aires: FCE.
- Robertini, Camillo (2016): “*Gente que labura*”, *operai in Argentina durante la dittatura. Vita quotidiana, soggettività e memoria: il caso della Fiat Concord (1976-1983)*. Tesis doctoral de Università degli Studi Firenze / Università de Siena, Italia.
- Roitman, Susana (2018): “En la guarida del lobo: resistencias y organización obrera en las Fábricas Militares de Villa María y Río Tercero (1976-1983)”. *Workshop Clase Obrera y Dictadura Cívico-Militar*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- Romano, Silvia (ed.) (2016): *Colectivos y parcialidades políticas y sociales. Los desaparecidos y asesinados de Córdoba en los 70*. Córdoba: Editorial de la UNC.
- Romano, Silvia (2018): “Prácticas burocráticas en contextos autoritarios: represión y disciplinamiento en la Administración Pública de Córdoba, 1974-1978”. *Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad* 20, 47-88.
- Schorr, Martín (2013): “El poder económico industrial como promotor y beneficiario del proyecto refundacional de la Argentina (1976-1983)”. En: *Cuentas pendientes: los cómplices económicos de la dictadura*, Horacio Verbitsky y J. P. Bohoslavsky (eds.), Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 275-298.

Servetto, Alicia (2010): 73/76. *El gobierno peronista contra las "provincias montoneras"*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Zorzoli, Luciana (2018): "Las intervenciones a organizaciones sindicales durante la última dictadura militar argentina: un estudio cuantitativo". *Desarrollo económico* 57 (223), 487-510.